

Castilla-La Mancha recibe 98 millones de Alicante y Murcia por ceder caudales



F. J. B. Un informe del Gobierno remitido al diputado del Grupo Popular Ramón Aguirre certifica que los agricultores de Alicante y Murcia han pagado en el periodo 1986-2008 cerca de 100 millones de euros en concepto de canon ambiental al Gobierno de Castilla-La Mancha por ceder el agua del trasvase Tajo-Segura. Canal por el que, sin embargo, sólo ha llegado la mitad de lo que correspondía por ley. En total los agricultores han pagado unos 220 millones de euros por el agua a Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, según el acuerdo en vigor desde que se aprobó el trasvase.

Desglosado por cantidades y autonomías, el gobierno de Barreda recibió 98,4 millones; el de Esperanza Aguirre, hoy presidenta de Madrid, 73,5 millones, y Extremadura, 49 millones, según refleja la documentación a la que ha tenido acceso el periódico.

La ley del trasvase estableció que Alicante y Murcia recibirían todos los años 600 hm³ de agua del Tajo (Entrepeñas y Buendía), ampliables a 1.000 hm³. En la práctica, del trasvase han llegado de media unos 350 hm³ anuales todos los años, pero con ejercicios en los que no se alcanzaron ni los 300 hm³.

Según un informe de la patronal Coepa, la desaparición del trasvase supondría la quiebra de la agricultura en la provincia -el 62% del sector depende del Tajo- dando lugar, además, a que los agricultores alicantinos y murcianos tuvieran derecho a reclamar al Gobierno central unos 10.000 millones de euros en concepto de reclamación patrimonial. Empresarios y expertos universitarios consideran que cualquier modificación de las condiciones que regulan el trasvase desde la ley de 1971 -caducidad en 2015 o establecimiento de una reserva estratégica de 600 hm³- vulnera la Constitución y daría por tanto opción a un contencioso jurídico, ya que las competencias hídricas en España son potestad del Estado y no de las comunidades autónomas.

Malestar

Por otro lado, la manifestación del pasado fin de semana en Talavera reclamando el final del trasvase ha vuelto a encender los ánimos en el sector agrícola provincial. En este sentido, Andrés Martínez, presidente de la Junta Central del Trasvase Júcar-Vinalopó, apuntó ayer que "en el último año todo está parado y han reaparecido antiguos dictadores del agua de la etapa de Narbona".

Por su parte, el conseller García Anton, indicó que "vuelven a aparecer detrás de manifestaciones como la del otro día en Talavera los grupos que apoyaron la derogación del trasvase del Ebro, que propiciaron el cambio de toma del trasvase Júcar-Vinalopó y que ahora están apoyando una caducidad para el Tajo-Segura. No lo vamos a consentir".